

# Barrancabermeja en 1983: unidad sindical y protesta popular

## BARRANCABERMEJA in 1983: LABOR UNION AND POPULAR PROTEST

Juan Camilo Delgado-Gaona<sup>1</sup> 

<sup>1</sup>Ingeniero Ambiental y de Saneamiento, Instituto Universitario de la Paz. Defensor de Derechos Humanos, Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS. Correo: camilodelgadogaona@gmail.com

**Recibido:** 20 de junio de 2023 - **Aceptado :** 4 de mayo del 2023  
ISSN 2027-552



### Resumen

En el siguiente artículo se presentan los hechos más relevantes, en cuanto a la lucha sindical y popular, acontecidos en la ciudad de Barrancabermeja durante el año 1983. La exposición de las acciones colectivas se elaboró a partir de la revisión del archivo del Semanario Voz —llamado Voz Proletaria hasta la edición 1241 del 7 de julio de 1983—, específicamente del periodo comprendido entre las ediciones 1215 y 1265. Se destaca en el presente trabajo el papel de la Coordinadora Popular de Barrancabermeja y el paro cívico por el derecho al agua; la negociación del pliego de peticiones presentado por la Unión Sindical Obrera (USO); las acciones de unidad y denuncia sindical en el Hospital San Rafael, en Fertilizaciones Colombianos (Ferticol) y en la Empresa de Obras Sanitarias de Santander (Emposan); y las acciones colectivas en rechazo a la represión militar y al criminal accionar del grupo paramilitar Muerte A Secuestradores (MAS). Los hechos expuestos dan cuenta de la convergencia de las luchas políticas, sindicales, cívicas y agrarias en la ciudad, que permitieron la consolidación de un proceso unitario y combativo como lo fue la Coordinadora Popular de Barrancabermeja.

**Palabras claves:** Acciones colectivas; Unidad sindical; Protesta popular.

### Abstract

The following article presents the most relevant events, in terms of labor and popular struggle, that took place in the city of Barrancabermeja during 1983. The exposition of collective actions was elaborated from the review of the archive of the weekly Voz —called Voz Proletaria until edition 1241 of July 7, 1983—, specifically from the period between editions 1215 and 1265. This work highlights the role of the Coordinadora Popular of Barrancabermeja and the civic strike for the right to water; the negotiation of the list of demands presented by the Unión Sindical Obrera (USO); the actions of labor unity and denunciation at Hospital San Rafael, at Fertilizantes Colombianos (Ferticol) and at Empresa de Obras Sanitarias de Santander (Emposan). Also, the collective actions in rejection of military repression and the criminal actions of the paramilitary group Muerte A Secuestradores (MAS). These facts showed the convergence of political, labor, civic and agrarian struggles in the city, which allowed the consolidation of a unitary and combative process such as the Coordinadora Popular of Barrancabermeja.

**Keywords:** Collective actions; Union unity; Popular protest.

**Cómo citar:** Delgado-Gaona, J. (2023). Barrancabermeja en 1983: unidad sindical y protesta popular. *Cambios y Permanencias*, 14 (2), p.p.143-162. DOI: <https://doi.org/10.18273/cyp.v14n2-202309>

## Introducción

A principios de la década de los años 80, y especialmente desde el mandato de Belisario Betancur, el pueblo colombiano enfrentó el aumento de la deuda externa y una crisis financiera que intentó subsidiarse con recursos del Estado. Esto significó la disminución de la inversión social, el incremento del desempleo, de las necesidades básicas insatisfechas, del costo de la canasta familiar y, en general, de la pobreza. También se presentó un efecto negativo en los aspectos laborales y sociales, debido al ajuste fiscal solicitado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) (Villarraga Sarmiento, 2015, p. 20).

Lo anterior, sumado a la corrupción de las administraciones locales, la persecución sindical, la estigmatización del campesinado, el hacinamiento en los cascos urbanos y la exclusión de amplios sectores de la población, llevó al auge de protestas sindicales, paros cívicos, marchas campesinas y manifestaciones callejeras, con dinámicas propias en cada región del país, que progresivamente fueron consolidando plataformas que trascendían estrictamente reivindicaciones sectoriales, por ejemplo, sindicales o estudiantiles, sino que permitían la confluencia de múltiples expresiones populares, tal como ocurrió con la Coordinadora Popular de Barrancabermeja creada en 1983 (CNMC, 1984, pp. 51-58).

De acuerdo con la base de datos de las luchas sociales del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), a inicios de los años 80 se presentó una tendencia ascendente de la movilización social, con dos picos en los años 1985 y 1987. Según Archila Neira (2000, p. 15), en 1975 ocurrió un descenso de la movilización social que correspondió en esencia con el mandato de Julio César Turbay Ayala y su Estatuto de Seguridad (1978-1982). A partir de 1982, la lucha social se reactivó, especialmente en los sectores agrarios y cívicos.

A inicios del año 1984, el semanario *Voz* del Partido Comunista Colombiano (PCC) presentó un balance de los paros cívicos que habían sucedido en el territorio nacional durante el año 1983. Un total de 18, especialmente motivados por la ausencia de garantías para el acceso a los servicios públicos (*Voz*, 5 de enero de 1984, p. 13). Otra cifra corresponde a la presentada por Mauricio Archila Neira en su libro *Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia, 1958-1990*, la cual es de 25 paros cívicos realizados en 1983 (2003, p. 195). En Barrancabermeja, además del combativo paro cívico por el derecho al agua, el 13 de abril de 1983, se vivió un ambiente de posible huelga de los trabajadores petroleros; acontecieron acciones de unidad sindical, protesta y denuncia en el Hospital San Rafael, en Fertilizantes Colombianos (Ferticol) y en la Empresa de Obras Sanitarias de Santander (Emposan), y el municipio fue epicentro para que el campesinado del Magdalena Medio, junto con la Coordinadora Popular de Barrancabermeja, denunciara la represión militar y el criminal accionar del grupo paramilitar Muerte A Secuestradores (MAS).

La exposición de las acciones de protesta que ocurrieron en Barrancabermeja durante el año 1983 se elaboró especialmente a partir de la revisión del semanario *Voz* —llamado *Voz Proletaria* hasta la edición 1241 del 7 de julio de 1983—, específicamente del periodo comprendido entre las ediciones 1215 y 1265.

## La Coordinadora Popular de Barrancabermeja y el paro cívico por el derecho al agua

Para comienzos de 1983, la seccional Barrancabermeja de la Unión Sindical de Trabajadores de Santander (Usitras) había convocado a las organizaciones sindicales del municipio con el objetivo de establecer una coordinación entre los sindicatos, tal como ocurrió en el paro cívico local de 1975, el paro cívico nacional de 1977 y la lucha reivindicativa de los trabajadores de Ecopetrol en 1981. En las primeras reuniones se determinó que el descontento popular de la población de Barrancabermeja provenía esencialmente de la problemática del agua, aunque existían otras problemáticas acumuladas relacionadas con la electricidad, la vivienda, la salud, la educación y la comunicación vial; evidencia del abandono estatal. Por ese motivo, “casi desde un principio hubo un consenso en caracterizar la organización que había de darse, como *popular*, y no estrictamente *sindical* como la experiencia inmediatamente anterior que había en la ciudad” (CNMC, 1984, p. 52). Es así como nace la Coordinadora Popular de Barrancabermeja, una organización amplia que,

a través de su Plataforma de Lucha del Pueblo de Barrancabermeja<sup>1</sup> (7 de abril de 1983), buscaba reivindicar los derechos fundamentales de toda la población del municipio.

Casi dos décadas antes del nacimiento de la Coordinadora Popular, el 20 de mayo de 1963, en Barrancabermeja aconteció el primer paro cívico por la calidad y el acceso a los servicios públicos, esencialmente de agua potable, en ese momento suministrado por la empresa Acueducto y Alcantarillado de Santander S. A. (Acuasur). Para el año 1983, veinte años después, y tras la realización de otros paros cívicos como los de 1975 y 1977, la situación distaba de lo exigido. Desaparecida Acuasur, la empresa a cargo del suministro de agua *potable* en el municipio, Empresa de Obras Sanitarias de Santander (Emposan), había empezado a aumentar las tarifas del servicio. El descontento popular fue creciendo proporcional al alza de las tarifas y al detrimento de la calidad del agua, hasta que “[l]as cosas se agravaron en los meses de enero y febrero, cuando se produjeron racionamientos de cuatro y cinco días por fallas en el mantenimiento del acueducto, precisamente cuando Barrancabermeja soportaba temperaturas de hasta 44 grados centígrados”, tal como señalaría Leonardo Posada, dirigente comunista de la Coordinadora Popular (Posada, 7 de abril de 1983, p. 4)

Ante la crítica situación del servicio de agua potable en el municipio, el 10 de marzo, la Coordinadora Popular, que agrupaba a más de treinta organizaciones sindicales, barriales, femeninas, estudiantiles y políticas de Barrancabermeja, realizó una multitudinaria asamblea en la que se aprobaría el siguiente pliego de exigencias: 1. Dotación adecuada de equipos de mantenimiento y reparación del acueducto; 2. Revisión inmediata de la planta de tratamiento de agua potable; 3. Descontaminación de la ciénaga San Silvestre; 4. Revisión de las tarifas de acuerdo al criterio de servicio público; 5. La constitución de una empresa municipal, lo cual significaría la salida de Emposan. La asamblea popular había decidido que, ante la negativa de aprobación del pliego, se prepararía el paro cívico (*Voz Proletaria*, 24 de marzo de 1983, p. 9).

El 5 de abril, profesionales de la Universidad Industrial de Santander (UIS), en un espacio realizado en la Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja (Cafaba), denunciaron ante las autoridades civiles y militares la problemática que enfrentaba la ciénaga San Silvestre, debido a la presencia elevada de fenol (Acevedo, 14 de abril de 1983, p. 5). Como señalaría Alberto Acevedo, corresponsal especial del semanario *Voz Proletaria* en esa época, “[e]ste elemento tóxico se encuentra en las fuentes de agua que consumen los 150.000 habitantes de Barrancabermeja, en una proporción 100 veces mayor a la permitida por la Organización Mundial de la Salud” (Acevedo, 28 de abril de 1983, p. 10). Además del fenol, se denunciaba la presencia de otros contaminantes generados en la producción y refinación de crudo a cargo de Ecopetrol, así como los efectos sobre la salud de la población de la ciudad:

En el período comprendido entre enero y mayo de 1982 en el hospital San Rafael de Barrancabermeja fueron atendidos 670 pacientes con problemas de la piel y en el tejido subcutáneo. En el mismo lapso se atendieron a 930 personas con síntomas de infección intestinal, de las cuales 141 debieron ser hospitalizadas. Por esa época se registró a 72 mujeres que presentaron enfermedades antes o inmediatamente después del alumbramiento de sus hijos (Acevedo, 28 de abril de 1983, p. 10).

La negativa de la institucionalidad de atender la necesidad del servicio de agua potable de la población de Barrancabermeja llevó a la Coordinadora Popular a convocar el 7 de abril una gran asamblea en el Parque Infantil o *Parque del Pueblo*. En el espacio, que inició a las cinco de la tarde, se aprobó con el puño en alto la hora cero del paro cívico. Iniciaría a la media noche del 12 de abril, prolongándose durante todo el siguiente día (Acevedo, 14 de abril de 1983, p. 5). El 12 de abril, los militantes comunistas Leonardo Posada, David Rabelo y Julio Alfonso Poveda asistieron a la asamblea liberal que el Frente de Izquierda Liberal Auténtico (FILA) había convocado en el Parque Santander, con el objetivo de asumir una posición frente al paro cívico. Recuerda Rabelo:

<sup>1</sup> La Plataforma de Lucha del Pueblo de Barrancabermeja incluía reivindicaciones relacionadas con acueducto, salud, servicios públicos, educación, calles, problemas obreros y problemas campesinos.

Nos ubicamos en la parada del bus a escuchar las diversas intervenciones. Cuando habló Horacio Serpa Uribe, Leonardo dijo: “No hay nada que hacer, mañana realizaremos el paro cívico”. La posición de Serpa fue de reto a los organizadores del paro cívico a ver si eran capaces de mover a la gente. Al otro día 20.000 personas se movilizaban por las calles de Barrancabermeja. (Rabelo, 2016).



**Figura 1.** Asamblea de la Coordinadora Popular de Barrancabermeja en el Parque del Pueblo, 7 de abril de 1983.  
**Fuente:** Fotografía de Alberto Acevedo. Tomada de *Voz Proletaria*, 14 de abril de 1983, Edición 1229, p. 5.

La postura del FILA, y en especial de Horacio Serpa, tenía una razón política y económica. Debido a la influencia que tenía en Barrancabermeja, gracias a la masa de seguidores y votantes que había aglutinado en su escalamiento político, gran parte de la “tajada burocrática” pertenecía al serpismo, incluida la administración de Emposan<sup>2</sup>. Como señaló Alberto Acevedo, “desnudar el problema del agua en Barranca era no solo mostrar claramente la responsabilidad de Ecopetrol, sino la complicidad [...] de la cúpula política de Horacio Serpa” (Acevedo, 28 de abril de 1983, p. 5). A inicios de los años 80, Serpa había traicionado la comisión de diálogo con el gobierno central que se constituyó para buscar soluciones a la problemática del agua (Acevedo, 21 de abril de 1982, p. 4). Nada tenía que ver el liberalismo representado por Serpa con la población liberal que se movilizaba exigiendo sus derechos.

Lo anterior, igualmente había sido denunciado por la Unión Sindical Obrera (USO) en su órgano informativo *Frente Obrero*, del 5 de marzo de 1983, en el que responsabilizaba de la crítica situación del servicio de agua potable al gobierno de Belisario Betancur y a la “camarilla” de Horacio Serpa presente en la administración de Emposan, quienes estaban desfalcando a la empresa debido a los compromisos adquiridos con el Instituto Nacional de Fomento Municipal (Insfopal), “garante de los préstamos del Banco Mundial – máxima entidad crediticia del mundo que, entre otras cosas, exige la elevación constante de las tarifas de los servicios públicos para amortizar y pagar los intereses usurarios de las deudas de esta hipotecada República” (USO, 5 de marzo de 1983, p. 1). Con las consignas de “¡Abajo el gobierno belisarista!” y “¡Abajo la demagogia serpista!”, la USO, como integrante de la Coordinadora Popular, agitaba el desarrollo del paro cívico.

A la hora cero definida por la Asamblea Popular en el *Parque del Pueblo*, luego de que Leonardo Posada expusiera los motivos del paro cívico, en distintos barrios de Barrancabermeja doblaron las campanas de las iglesias, lanzaron voladores, repicaron los pitos, se incendiaron llantas en las calles, y horas antes en las instalaciones de la USO se entonó *La Internacional*. Era el comienzo de una nueva jornada de protesta en la que confluyeron además de los comités barriales y populares<sup>3</sup>, organizaciones sindicales como la

<sup>2</sup> Una de las estrategias del FILA para aumentar su caudal electoral fue promover invasiones para las familias destechadas, muchas de ellas desplazadas desde la ruralidad del Magdalena Medio por la violencia oficial que había declarado al campesinado objetivo militar (Acevedo, 19 de mayo de 1983, p. 10). En los periodos electorales, el FILA acudía a los asentamientos ofreciendo su intervención en las pésimas condiciones materiales de vida, a cambio de los votos para el partido serpista.

<sup>3</sup> Los comités barriales estaban conformados por dirigentes cívicos, mientras que los comités populares los conformaban delegados de las organizaciones sindicales, gremiales y campesinas.

Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), la Federación de Trabajadores del Petróleo (Fedepetrol), la USO y Usitras (Acevedo, 14 de abril de 1983, p. 5).



**Figura 2.** Movilización por las calles de Barrancabermeja, 13 de abril de 1983.

**Fuente:** fotografía de Alberto Acevedo. Tomada de *Voz Proletaria*, 21 de abril de 1983, Edición 1230, p. 1.

Empezaron a extenderse las barricadas, aunque en algunos barrios populares desde las ocho de la noche del día 12 de abril ya se había paralizado la movilidad vial. Grandes concentraciones se presentaron en puntos neurálgicos del municipio como el As de Copas, Paso Nivel, El Muelle y la entrada a la Refinería de Ecopetrol.

En el resto del día el paro se desarrolló con entusiasmo y a la postre en medio de canciones. Las gentes sacaron equipos de sonido a las puertas de sus casas y en no pocos lugares hubo baile y canciones. A partir de las tres de la tarde más de 10.000 personas marcharon desde el 'As de Copas', recorriendo los principales barrios populares, pasando por la zona comercial hasta llegar al Parque Infantil (Acevedo, 21 de abril de 1983, p. 4).



**Figura 3.** Bloqueo en el As de Copas, 13 de abril de 1983.

**Fuente:** fotografía de Alberto Acevedo. Tomada de *Voz Proletaria*, 21 de abril de 1983, Edición 1230, p. 4.

Pese al gran respaldo popular del paro cívico, la administración municipal se rehusó a recibir a la delegación de la Coordinadora Popular de Barrancabermeja, que participaría en los diálogos para que las exigencias de la población se materializaran en el acceso seguro y social al agua potable y a otros servicios públicos. Lo anterior llevó a la Coordinadora a convocar una nueva Asamblea Popular en el *Parque del Pueblo* para evaluar y preparar un segundo paro cívico (Acevedo, 12 de mayo de 1983, p. 1).

La Coordinadora Popular ha denunciado que ni el gobierno seccional ni la administración nacional han atendido con prontitud viejas reclamaciones de la comunidad que claman porque haya agua potable, se mejoren los servicios de alcantarillado, acueducto, presupuesto para escuelas, salud, carreteras y se ponga freno al inusitado y arbitrario crecimiento de las tarifas de servicios, que además no se prestan (Acevedo, 12 de mayo de 1983, p. 3).

En medio de un recorrido del presidente Belisario Betancur por el Magdalena Medio, inaugurando nuevos batallones contrainsurgentes, este realizó una parada en Barrancabermeja para implorar a su población no realizar un nuevo paro cívico (Antonio, 19 de mayo de 1983, p. 3), cuya fecha estaba prevista para el día 25 de mayo de 1983 (Voz Proletaria, 19 de mayo de 1983, p. 4). Una de las consecuencias más significativas del paro cívico fue la destinación de los recursos adquiridos por Insfopal a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para las reparaciones y adecuaciones que se requerían en la planta de tratamiento de agua potable de Emposan. Además, Ecopetrol empezó a asumir su responsabilidad en la asignación de recursos para la mitigación y compensación de los daños ambientales ocasionados a la ciénaga San Silvestre. Por último, según la información presentada en el Primer Congreso Nacional de Movimientos Cívicos en octubre de 1983, la repavimentación de las calles centrales de Barrancabermeja en los meses de septiembre y octubre fue uno de los resultados del paro cívico (CNMC, 1984, p. 53).



**Figura 4.** Un niño posa sonriente en una de las barricadas del paro cívico.

**Fuente:** fotografía de Alberto Acevedo. Tomada de *Voz Proletaria*, 12 de mayo de 1983, Edición 1233, p. 3.

En 1985, en la sección “Polémica ideológica” del semanario *Voz*, Nicolás Buenaventura expone “una cuestión esencial de todo proceso social”: la *doble legalidad* —legalidad institucional y legalidad *desde abajo*—. Su planteamiento parte de un balance del paro cívico de 1983 en Barrancabermeja, presentado por un sindicalista, al parecer, en el marco del Encuentro Obrero, Campesino y Popular realizado los días 16 y 17 de marzo de 1985 en la ciudad de Bogotá. Buenaventura acude al discurso del sujeto, el cual es fundamental para ampliar lo que fue el desarrollo de tan importante acción de unidad y protesta popular en la ciudad:

Compañeros, todo nos funcionó en orden, decía. Se propuso un lugar para la atención de la Cruz Roja y allí estaba. La ubicación del transporte mínimo indispensable, en otro sitio. [...]. En su puesto de trabajo, de todos conocido, estaba el Centro de Operaciones del Comité Cívico. También los sindicatos, nosotros los sindicalistas, ocupamos una base, un lugar. Incluso el comandante de la fuerza pública discutió y acogió, en acuerdo con el Comité, la posición o el sitio para su tropa. —Así compañeros, remataba, todo funcionó así, al pelo, en orden.

Y en ese momento el hombre se detuvo unos segundos ante la asamblea, como para darle campo a alguna idea que lo estuviera acosando y dijo: yo creo compañeros, que ese paro era legal. Porque... cómo no va a ser legal algo en lo cual todo mundo, toda la gente está de acuerdo (Buenaventura, 28 de marzo de 1985, p. 16).



**Figura 5.** Movilizaciones en el marco de la preparación y desarrollo del paro cívico en Barrancabermeja.  
**Fuente:** fotografías de Alberto Acevedo. Tomada de *Voz Proletaria*, Edición 1229, 14 de abril de 1983, p. 1.

## Ambiente de huelga petrolera

*“El trabajador petrolero crea su salario de un día en 42 minutos de trabajo. Las restantes 7 horas y 18 minutos de la jornada diaria son empleados para la creación de una de las más altas tasas de plusvalía del país”* (Leonardo Posada, *Voz Proletaria*, 7 de abril de 1983)

En el marco de la negociación del pliego de peticiones presentado por la USO a Ecopetrol, y debido a la negativa de la empresa de hacer “ofrecimientos sustanciales a los puntos centrales”, las etapas de discusión entre las partes no concluyeron en acuerdos favorables. Por tanto, en la madrugada del miércoles 23 de marzo, el entonces ministro de trabajo, Jaime Pinzón López, convocó un tribunal de arbitramento, que de inmediato fue rechazado por los trabajadores petroleros al considerarlo un arma antisindical al servicio patronal. La USO anunció su determinación de lanzarse a la huelga, y durante el día miércoles, a pesar de la militarización que se impuso en Barrancabermeja, convocó asambleas en la Refinería y El Centro, como también en Casabe (Yondó), Cantagallo, Orito y Bogotá (*Voz Proletaria*, 24 de marzo de 1983, p. 4).

El tribunal de arbitramento representaba para la USO un golpe a sus aspiraciones salariales y prestacionales plasmadas en el pliego de peticiones, toda vez que Ecopetrol no facilitaba

una fórmula de acuerdo laboral, por cuanto no ha hecho ofrecimientos salariales siquiera dentro de los porcentajes ofrecidos por el gobierno en su política salarial, en tanto que se niega a incrementar las prestaciones sociales, negando en la práctica el derecho a la contratación colectiva (*Voz Proletaria*, 31 de marzo de 1983, pp. 1 y 4).

Posterior al desarrollo de las asambleas, la USO definiría una nueva estrategia en la negociación con la que consideraba se podría llegar a un acuerdo con la empresa. Esta estrategia estaría concentrada en cuatro aspectos esenciales: 1. Aumento salarial del 40 % frente al 23,5 % que ofrecía Ecopetrol<sup>4</sup>; 2. Negativa de instalar un tribunal de arbitramento, de lo contrario estallarían la huelga; 3. Defensa de la contratación colectiva; 4. Estabilidad sindical. Respecto al último punto, la USO denunció que para ese momento Ecopetrol ya había dado apertura a procesos, sanciones e incluso el despido de un dirigente sindical. A la par, el sindicato continuaba agitando las banderas de la posible huelga, mientras el Ejército y la Policía merodeaban los campos de producción (*Voz Proletaria*, 31 de marzo de 1983, pp. 1 y 4).

<sup>4</sup> El aumento de un 23,5 % se colocaba por debajo de las empresas de menor rendimiento económico. Además, era inferior al porcentaje pactado dos años atrás entre las partes: 29 % (Posada, 7 de abril de 1983, p. 4).



**Figura 6.** Asamblea de la USO en Barrancabermeja.

**Fuente:** tomada de *Voz Proletaria*, 31 de marzo de 1983, Edición 1227, p. 1.

Ante las dilaciones de la empresa, la USO desarrolló acciones colectivas de protesta como mítines en la Refinería de Barrancabermeja y los campos de producción de El Centro; operaciones lonches que consistían en no acudir a los casinos de la empresa, sino llevar su propia comida desde la casa; y operaciones “mocho”, donde acudían al trabajo en bluyines recortados. En asamblea realizada el 23 de marzo en el Club Infantas, el estribillo de los trabajadores era “¡Hora cero, te espero!”. Ecopetrol respondió desplegando una serie de represalias para intentar diezmar a los trabajadores petroleros. Leonardo Posada mencionaba al respecto:

Las quincenas están llegando por mitad, a pesar de la decisión de los trabajadores de no pagar deudas – previendo la huelga– debido a los descuentos ilegales que Ecopetrol les hace del tiempo utilizado en los mítines. Por su parte, el sindicato ha visto disminuidas sus partidas convencionales en medio millón de pesos descontados –también ilegalmente– por las operaciones “spry” (consignas murales en las instalaciones) y los pinchazos de cerca de 10.000 llantas, atribuidos a los trabajadores. ECOPETROL ha instaurado demanda penal a decenas de trabajadores por este motivo, en tanto que mantiene en una especie de cuarentena a centenares de supervisores, técnicos y otros profesionales, con el objetivo de que desempeñen cualquier labor en caso de huelga (Posada, 7 de abril de 1983, p. 1).

La agitación y preparación de la posible –para ese año– cuarta huelga de los trabajadores petroleros, posterior a la creación de Ecopetrol, no fue obstáculo para que dirigentes y afiliados de la USO fuesen parte activa de la organización del paro cívico por el derecho al agua, a través de su participación en la Coordinadora Popular de Barrancabermeja. Además, la solidaridad de otros sectores sociales y sindicales de la ciudad y el país no se hizo esperar desde el primer momento en que la USO anunció su determinación de lanzarse a la huelga en caso de que la empresa petrolera se negara completamente a definir un acuerdo con los trabajadores. El movimiento sindical colombiano consideraba los acuerdos entre Ecopetrol y la USO como punto de referencia para otras convenciones colectivas, por ello el apoyo irrestricto a la huelga y a la defensa del pliego de peticiones (Posada, 7 de abril de 1983, p. 4).

Finalmente, la empresa en las últimas conversaciones empezaría a ceder en los aspectos centrales del pliego de peticiones. En asamblea realizada el 11 de abril, los trabajadores petroleros reconocerían lo pactado como un “triumfo obrero popular”, e incluso, como un “triumfo por adelantado” de lo que sería el paro cívico convocado para el 13 de abril. El acuerdo ratificado el 10 de abril contempló un aumento del fondo de vivienda, el traslado a la familia de la pensión de jubilación del trabajador que sobrepase los diez años de empleo, una pensión igual al 85 % de su salario para los soldados, subsidios de arriendo para los que no posean vivienda, la extensión de los subsidios de transporte para los hijos e hijas de los trabajadores, aumento de la prima de vacaciones, auxilio económico para el funcionamiento de la escuela sindical y del colegio de bachillerato de la USO y un incremento del 25 % de los salarios en el primer año de la vigencia convencional e igual incremento para el segundo año (*Voz Proletaria*, 14 de abril de 1983, p. 5).



El denominado “triunfo obrero popular” respondió a la unidad de acción de los trabajadores petroleros con otros sectores sociales. Ante las innumerables provocaciones patronales y militares, la USO no escatimó esfuerzos para la agitación y organización de una huelga que, en caso de estallar, se habría conjugado con el combativo paro cívico organizado por la Coordinadora Popular de Barrancabermeja.

## **Denuncias sindicales desde Ferticol, Emposan y Hospital San Rafael**

En asamblea realizada el 25 de noviembre de 1982, el sindicato de base de Ferticol, Sintrafercol, denunció la pretensión del Gobierno nacional de vender la empresa a la industria militar (Indumil) considerando que “no es más que otra patraña de la administración para deshacerse de los trabajadores y evadir irresponsablemente sus obligaciones (económicas) para con estos”. La seccional Barrancabermeja de Usitras, en carta dirigida el 6 de diciembre de 1982 al presidente Belisario Betancur, igualmente había denunciado y rechazado la intención de circunscribir a Ferticol en la carrera armamentista. La empresa que proveía fertilizantes y abonos para el impulso de la agricultura en Colombia quería ser vendida para la producción de materia prima (nitrato técnico) en la fabricación de explosivos, lo cual significaría además el despido de más de 450 trabajadores (Acevedo, 6 de enero de 1983, p. 7).

La propuesta antinacional de entregar las plantas de Ferticol a Indumil generó durante el año 1983 una álgida discusión entre el sindicato de base y la administración. Bajo el argumento del estancamiento de la producción y la ausencia de inversión técnica en el desarrollo de la empresa, la administración se inclinaba por su liquidación, a pesar de que, como se había denunciado en ese momento, el mismo gerente de Ferticol boicoteó cualquier intento de intervención en la empresa que permitiera una mayor productividad. Tal como ocurrió con la propuesta para aumentar la producción de urea y amoníaco presentada en octubre de 1982 por el Instituto de Fomento Industrial (IFI), investigación que había sido financiada por las Naciones Unidas y el Banco Mundial, y ocultada por el gerente de la empresa para evitar su implementación (Acevedo, 12 de mayo de 1983, p. 7).

El sindicato de Ferticol logró poner en la palestra pública el interés militarista del Gobierno nacional que solo acarrearía un “estímulo al armamentismo, que es sinónimo de atraso, de represión y de violencia”, además

los militares para tomar la producción de nitrato técnico en sus manos, necesitan acabar con el sindicato, necesitan despedir a todos los trabajadores; en otras empresas de la ingeniería militar los operarios son “empleados públicos” y no puede existir una organización sindical. Desde luego, la producción militar en gran escala es incompatible con el sindicalismo, el manejo de los derechos de los trabajadores y la democracia (Acevedo, 12 de mayo de 1983, p. 7).

Denunció además el sindicato la amenaza social y ambiental que representaba la producción a gran escala de materia prima para explosivos, en una región que padece altas temperaturas y largos periodos de sequía, sumado a su cercanía con depósitos de combustibles de Ecopetrol. La denuncia del sindicato no estuvo únicamente concentrada en impedir la venta de Ferticol, sino que también estaba dirigida al llamado de solidaridad y acción de otras organizaciones sociales y populares que no podían permanecer indiferentes ante la problemática (Acevedo, 12 de mayo de 1983, p. 7).

Si bien durante el año 1983 Ferticol no pasó a manos de Indumil, esto no significó que los militares no se tomaran de alguna manera la empresa. Así ocurrió en el mes de octubre, cuando en un intento patronal de diezmar a los trabajadores sindicalizados que se encontraban negociando un pliego de peticiones cuatro meses atrás, las instalaciones de Ferticol fueron militarizadas (Voz, 27 de octubre de 1983, p. 8), como una muestra más de la represión y la guerra psicológica que la burguesía ejercía contra los sectores organizados de la clase trabajadora en Barrancabermeja y el país.

En la Resolución de su Asamblea General en el mes de noviembre, la Coordinadora Popular se refirió a las negociaciones entre Sintrafercol y la empresa de la siguiente manera:

Saludamos la favorable culminación de la lucha de los trabajadores de Fertilizantes Colombianos SA, al firmar su nueva convención colectiva de trabajo después de 140 días de difíciles negociaciones y la destacada y ejemplar participación del Comité Femenino de Sintrafercol. Pero alertamos a la opinión pública porque prácticamente los 400 trabajadores de la Empresa han sido condenados a la muerte laboral al seguirse insistiendo en la transformación de la misma en productora de materia prima de explosivos para Indumil y la consiguiente terminación del contrato de trabajo para los actuales operarios (Coordinadora Popular de Barrancabermeja, 1983).

Respecto a Emposan, además del pésimo servicio de acueducto que prestaba en Barrancabermeja, vulneraba los derechos laborales de sus trabajadores. Para el mes de mayo de 1983, los trabajadores estaban dispuestos a lanzarse a la huelga en caso de que la empresa siguiera dilatando las negociaciones del pliego de peticiones. El pliego presentado por el sindicato de Emposan, quien fue filial de Usitras, contenía 22 puntos y databa del 30 de diciembre de 1982. Durante los meses siguientes, la empresa solo había hecho ofrecimientos relacionados con el salario. Para entonces, Emposan tenía 45 categorías salariales,

todas ellas arbitrarias, que son apenas el reflejo del clientelismo que ha reinado en Emposan, para atender, en los últimos años, las cuotas políticas del FILA, que orienta el parlamentario Horacio Serpa Uribe (Acevedo, 5 de mayo de 1983, p. 7).

En entrevista realizada por *Voz Proletaria*, Olinto González, dirigente sindical de Emposan, denunció la injusticia que representaba para los 280 trabajadores de la empresa las distintas categorías salariales. Igualmente, señalaba que, con el recaudo de tan solo un mes en Barrancabermeja, la empresa podía cubrir lo estipulado en el pliego de peticiones. Los trabajadores sufrían la carga laboral que significó el aumento de la prestación de servicios por parte de Emposan, pues el personal y los salarios no eran correspondientes a ese aumento (Acevedo, 5 de mayo de 1983, p. 7).

Una de las principales peticiones del sindicato fue que se estableciera un salario mínimo de \$13.000 mensuales, además de revisar otros puntos relacionados con las prestaciones sociales. Teniendo en cuenta que para inicios de mayo de 1983 la etapa de negociaciones estaba culminando, y la intransigencia patronal impedía llegar a un acuerdo favorable para los trabajadores, el sindicato determinó que, en caso de implementar un tribunal de arbitramento, la huelga sería inminente (Acevedo, 5 de mayo de 1983, p. 7). Emposan nunca garantizó un adecuado servicio de acueducto y alcantarillado, pero tampoco brindó a sus trabajadores condiciones laborales dignas.

Finalmente, en relación con el Hospital San Rafael, el 1 de junio, los trabajadores sindicalizados en la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales, Clínicas y Consultorios (Anthoc) decidieron declarar el cese de actividades a través de la huelga, debido a la negativa de la administración de hacer ofrecimientos favorables de acuerdo al pliego de peticiones presentado por la asociación. Desde el primer día de huelga, el hospital fue militarizado y tras el desalojo de los trabajadores, estos improvisaron carpas en la calle desde donde realizaron sus acciones colectivas de protesta. Tanto la administración del hospital, como el alcalde municipal de ese periodo, Jaime Barba, eligieron la militarización y la intransigencia, antes que buscar soluciones a las exigencias de la población trabajadora y, a su vez, reactivar la asistencia médica de la ciudadanía (Voz Proletaria, 16 de junio de 1983, p. 5).

Las negociaciones del pliego de peticiones habían sido suspendidas el 8 de abril, luego de que culminara la etapa de conciliación. Además, según la administración del Hospital San Rafael, los trabajadores tenían la calidad de empleados públicos, por ende, no podían presentar pliego de peticiones, salvo elevar “solicitudes respetuosas”. Sin embargo, como señaló en ese momento José Plata, dirigente de Anthoc y secretario general de Usitras, desde 1966 los trabajadores venían firmando convenciones colectivas, lo cual les motivaba a no dejarse arrebatar lo que habían logrado a través de la lucha sindical durante 16 años (1966-1982) (Voz Proletaria, 16 de junio de 1983, p. 5).

El líder sindical dijo que en una maniobra para desconocer la representatividad del sindicato, se ofreció un aumento igual al tope propuesto por el gobierno y el incremento de algunas primas, pero mediante una resolución del hospital, sin firmar convención colectiva. Esto implicaría abrir un gran boquete para arrinconar al sindicato y arrebatar gradualmente a los trabajadores las prestaciones sociales de que han venido disfrutando de alguna manera (Voz Proletaria, 16 de junio de 1983, p. 5).



**Figura 7.** Los trabajadores de la salud, con Anthoc a la cabeza, reclaman del gobierno más presupuesto.  
**Fuente:** tomada de *Voz Proletaria*, 16 de junio de 1983, Edición 1238, p. 5.

A inicios del año 1983, Anthoc había denunciado el inadecuado manejo de la situación laboral del Hospital San Rafael, que se reflejaba además en las limitaciones de la prestación de los servicios de salud. Por ejemplo, el Fondo Hospitalario Nacional había entregado al centro asistencial maquinaria e implementos que se encontraban abandonados en bodegas y pasillos por orden de la administración. La ambulancia del hospital llevaba tres años abandonada, mientras los directivos del hospital aumentaban sus sueldos y dilapidaban el presupuesto abriendo consultorios particulares (Voz Proletaria, 16 de junio de 1983, p. 5).

Gradualmente, otros sectores sindicales y populares fueron solidarizándose con los trabajadores del Hospital San Rafael, tal como ocurrió el 14 de julio, cuando por iniciativa de la Coordinadora Popular de Barrancabermeja se realizó una gran concentración a las afueras del hospital en la que intervinieron Sebastián Sajonero, integrante del sindicato de Ferticol, Rafael Gómez en representación de la Subdirectiva de la USO y Leonardo Posada, vocero de la Coordinadora Popular, quienes denunciaron la persecución sindical en la ciudad e hicieron un llamado a la movilización en caso de cualquier acción hostil contra los sindicatos que se encontraban negociando pliegos de peticiones (Voz, 28 de julio de 1983, p. 9).



**Figura 8.** Mitin en solidaridad con la huelga de los trabajadores del Hospital San Rafael.  
**Fuente:** tomada de *Voz*, 28 de julio de 1983, Edición 1244, p. 9.

## Por el desmonte de Muerte A Secuestradores

*“El infierno está en el corazón de Colombia, en un vasto atardecer que conocemos como el Magdalena Medio, donde las tierras son férciles y las aguas generosas y donde las injusticias son inmensas y seculares. Una cosa queda en claro; los autores materiales son bandas armadas de pistoleros a sueldo, que matan a pleno día, unas veces a cara descubierta y otras con la cara pintada... Los rumbos que va tomando el Magdalena Medio –¡y Dios no lo quiera! – amenazan con convertir el tiempo del gobierno del doctor Betancur en uno de los más sangrientos de nuestra historia” – Gabriel García Márquez, *El Espectador*, 28 de agosto de 1983*

En 1983, el naciente grupo paramilitar Muerte A Secuestradores (MAS), apoyado por estructuras del Ejército nacional, y financiado por terratenientes, ganaderos y narcotraficantes, generó una oleada de terror en el Magdalena Medio tras la ejecución de atroces crímenes contra el campesinado y militantes políticos de oposición, especialmente comunistas. Los asesinatos, torturas y desplazamientos se iban extendiendo en los municipios de Puerto Boyacá, donde se denunció la financiación de la Texas Petroleum Company (Voz Proletaria, 6 de enero de 1983, p. 1), Santa Helena del Opón, Cimitarra, Simacota, San Vicente de Chucurí, Puerto Berrío, Puerto Nare y Yondó. El MAS, la *invención* de los subversivos, como quería hacer creer a la opinión pública en diciembre de 1982 el entonces ministro de defensa, Fernando Landazábal Reyes (Voz Proletaria, 13 de enero de 1983, p. 1), estaba creando, como señaló García Márquez, “un infierno en el corazón de Colombia”.

Además del asesinato de decenas de campesinos, en Puerto Berrío, ya habían sido asesinados cuatro concejales, dos de ellos militantes del PCC (Voz Proletaria, 19 de mayo de 1983, p. 1). En Cimitarra, el grupo paramilitar decomisaba al campesinado motores y canoas bajo el argumento de estar siendo utilizados por la insurgencia, y, en Vuelta Acuña, una de las veredas más victimizadas, el MAS y el Ejército tenían sitiada a la población arrojándola a padecer hambre por el cerco que impedía el transporte de alimentos (Voz Proletaria, 2 de junio de 1983, p. 5). La población denunciaba las reuniones que se sostenían entre la XIV Brigada del Ejército nacional, acantonada en Puerto Berrío, y terratenientes de la región, en las que se ordenaba la persecución y el asesinato de dirigentes sindicales y comunistas de los municipios de Puerto Berrío, Puerto Nare y Puerto Boyacá (Voz Proletaria, 23 de junio de 1983, p. 7). Eso explicaba por qué distintos crímenes del MAS se cometían con armas de uso privativo del Ejército nacional (Voz Proletaria, 2 de junio de 1983, p. 5). Como señaló el dirigente nacional del PCC, Álvaro Vásquez del Real:

Es revelador que el terror se recrudece cuando se monta la nueva 14ª Brigada militar en el Magdalena Medio, cuando se hacen públicas las conexiones de algunos jefes castrenses con los grupos paramilitares, y cuando estos mismos grupos se enseñorean con absoluta impunidad de una zona que se supone completamente militarizada y controlada por la nueva unidad (25 de agosto de 1983, p. 5).

La presencia del presidente Belisario Betancur en el Magdalena Medio se estaba constituyendo en *visitas de mal augurio*, pues en cada municipio donde se detuvo<sup>5</sup>, posterior a su partida, los paramilitares del MAS arremetían contra el campesinado, tal como ocurrió en el mes de mayo en los municipios de Cimitarra y Puerto Berrío (Voz Proletaria, 2 de junio de 1983, p. 5). En este último municipio, Betancur habló desde el Concejo Municipal, donde anteriormente habían sesionado cinco concejales —militantes del PCC (3), el MOIR (1) y el Partido Liberal (1)— asesinados por el MAS. Allí, no mencionó una sola palabra relacionada con los concejales ausentes, se limitó a exhortar a la insurgencia para que culminara su lucha (Voz Proletaria, 9 de junio de 1983, p. 5).

---

<sup>5</sup> Belisario Betancur estuvo en Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Cimitarra y Barrancabermeja (Voz, 15 de septiembre de 1983, pp. 12 y 13).



**Figura 9.** Titulares de prensa en 1983.

**Fuente:** tomada de *Voz Proletaria*, 16 de junio de 1983, Edición 1238, p. 4.

La situación se hacía cada vez más crítica. En los lugares donde se pretendían expandir los grandes proyectos agroindustriales y agrícolas, por ejemplo, de palma y cacao, las familias campesinas eran despojadas o asesinadas (Voz, 14 de julio de 1983, p. 14). Además de las juntas de acción comunal y los partidos políticos de izquierda y democráticos, habían sido declarados objetivos militares dirigentes sindicales, sociales y campesinos de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC); el Sindicato de Trabajadores del Proyecto Forestal Carare-Opón (Sintrapoy); la seccional de Puerto Nare del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción (Sutimac); Usitras; el Sindicato de la Empresa Colombiana de Carburo y Derivados (Sintracolcarburos); la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción (Fenaltraconcem), y Fedepetrol (Voz, 11 de agosto de 1983, p. 14; Voz, 25 de agosto de 1983, pp. 12 y 13).

El genocidio planificado tenía un propósito, como señaló Gilberto Vieira White, secretario general del PCC (1947-1991), en un debate en la Cámara de Representantes el 6 de septiembre:

[...] aplastar toda oposición y concretamente arrebatar sus tierras a miles de campesinos, para dedicarlas a fundos de ganadería extensiva o a plantaciones de palma africana, en regiones que van a ser enormemente valorizadas por planes de obras públicas del actual gobierno (8 de septiembre de 1983, p. 3).

Los crímenes cometidos por el MAS estaban “sazonados” por la doctrina anticomunista del Estado colombiano que desplegaba militarmente el Ejército nacional, al perpetrar crímenes contra la población civil de la región acusada de “refugiar” a la insurgencia (Voz, 28 de julio de 1983, p. 3). Es así como se empieza a gestar un éxodo campesino desde varios municipios de la región hacia Barrancabermeja, a través del río que se teñía con la sangre del campesinado y el pueblo trabajador.

Respecto a la doctrina anticomunista del Estado colombiano, cabe mencionar que esta surge antes de que existiera una organización que se declarara propiamente como marxista y/o leninista. Evidencia de ello fue la brutal represión que sufrieron los huelguistas artesanos en Bogotá en 1919, los trabajadores petroleros en las huelgas de 1924 y 1927 en Barrancabermeja y los huelguistas de las bananeras de Magdalena en 1928. Cualquier acción organizada de la clase explotada, considerada antagónica a los privilegios de las clases dominantes, era considerada obra del comunismo internacional, y rápidamente contenida por los aparatos

represivos del Estado. Luego de 1930, el temor del bipartidismo fue acrecentándose con el nacimiento del PCC y de corrientes disidentes del liberalismo oficial influenciadas por ideas progresistas y de izquierda.

Tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 y la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 30 de abril del mismo año, se arrecia la injerencia militar de los Estados Unidos en Colombia y América Latina, con el fin de contener la influencia de la URSS<sup>6</sup> en un contexto de guerra fría. Pero, además, se agudiza la violencia bipartidista, derivando en los primeros núcleos guerrilleros liberales y de autodefensa campesina; algunos más tarde se transformarían en guerrillas comunistas. Luego de la participación en la guerra contrainsurgente al crear y enviar al Batallón Colombia a combatir a la República Popular Democrática de Corea entre 1951 y 1953, el Estado colombiano despliega la tesis del enemigo interno y la guerra de baja intensidad. Es por ello que durante los 192 meses del Frente Nacional (1958-1974), 126 meses estuvieron bajo estado de sitio, derivando en una sistemática violación de los Derechos Humanos y las libertades políticas de la población civil. Cualquier asomo de protesta social era reprimida por el Estado.

Las medidas represivas se trasladaron al gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978), en el que contra las políticas antidemocráticas de su gobierno se organizó un paro cívico nacional en 1977, que resultó en decenas de muertos y miles de heridos, además de allanamientos, persecuciones y detenciones de dirigentes populares y militantes de partidos de izquierda. La “democracia restringida” y la doctrina anticomunista continuó en el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), a través del Estatuto de Seguridad, como parte de la Doctrina de Seguridad Nacional impuesta por los Estados Unidos en Latinoamérica (Villamizar, 2017, pp. 33-49). Ante la creciente organización popular en el Magdalena Medio, el anticomunismo fue motivo para que inicialmente latifundistas y narcotraficantes, apoyados por políticos tradicionales del bipartidismo, y en colaboración con el Ejército Nacional, organizaran el grupo paramilitar MAS.

En Barrancabermeja, la Coordinadora Popular se había solidarizado con las víctimas del MAS. Por un lado, dirigió un documento al gobierno departamental y nacional denunciando la crítica situación de la región. Por el otro, en asamblea realizada el 8 de agosto, convocó a una gran movilización en solidaridad con la población desplazada, la cual iniciaría a las cinco de la tarde del día 11 (Voz, 11 de agosto de 1983, p. 6). Previo a la movilización convocada por la Coordinadora Popular, al medio día del 11 de agosto, un grupo de familias víctimas del MAS se tomaron la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, lo que llevó a un diálogo con el entonces ministro de gobierno (1983-1984), Alfonso Gómez Gómez, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal. La función del ministro en Barrancabermeja no era reunirse con la población manifestante, sino presidir un foro regional que se había convocado para el 12 de agosto con motivo de la creación de la Corporación Autónoma del Valle Medio del Río Magdalena. Ante esa situación, el campesinado señaló: “Jamás podrá haber desarrollo sobre una zona martirizada. Jamás podrán construirse obras sobre un charco de sangre y un montón de huesos campesinos” (Voz, 18 de agosto de 1983, pp. 12 y 13).



**Figura 10.** Toma de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, 11 de agosto de 1983.

**Fuente:** fotografías de Alberto Acevedo. Tomadas de Semanario Voz, 18 de agosto de 1983, Edición 1247, pp. 12 y 13.

<sup>6</sup> Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

La movilización en solidaridad con las víctimas del MAS, en la que participaron las organizaciones integrantes de la Coordinadora Popular, culminó al frente de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, mientras seguía ocupada por las familias campesinas a las que les fueron entregados víveres para el sostenimiento de la acción de protesta, cuyas principales exigencias era el desmonte del MAS y la protección del derecho a la vida (Voz, 18 de agosto de 1983, pp. 12 y 13). Mientras almorzaba en la iglesia, un campesino le resumía al periodista Ernesto Valero la situación de la región: “Cuando yo entré a la selva en 1952, había plaga, culebra y enfermedades, inclusive había mucho tigre, pero eso no era ninguna desgracia comparado con el MAS y los Tiznados. En la selva virgen no había esos bárbaros” (Valero, 22 de septiembre de 1983, p. 14).

Con ocasión de la toma de la iglesia, el obispo de Barrancabermeja, Bernardo Arango, rechazó enfáticamente lo ocurrido y señaló que los manifestantes “no son campesinos, sino comunistas” (Voz, 25 de agosto de 1983, p. 5). Las declaraciones del obispo eran contrarias a la postura de otros sacerdotes de la Diócesis de Barrancabermeja, quienes habían expresado su rechazo a la violencia paramilitar y latifundista ejercida contra el campesinado.

Este tipo de declaraciones respondía a la política anticomunista del Ministro de Defensa, Landazábal Reyes, quien más adelante declararía en pleno debate de la Cámara de Representantes, el 6 de septiembre, que la posición de los sacerdotes de otras partes del país que denunciaban la brutalidad del MAS respondía a la “posición de un grupo de clérigos que reciben las cuotas de los secuestros en las sacristías de Barranca, Cimitarra, Puerto Berrío y Puerto Boyacá” (Voz, 8 de septiembre de 1983, p. 3). Ya habían sido amenazados los sacerdotes Eduardo Díaz Ardila, integrante de la Coordinadora Popular, y Floresmiro López Jiménez, fundador de la Pastoral Social y del Colegio Camilo Torres Restrepo en Barrancabermeja (Voz, 25 de agosto de 1983, pp. 12 y 13). Ante las declaraciones de Landazábal, la Diócesis se pronunció:

Los sacerdotes de la diócesis de Barrancabermeja rechazamos enfáticamente las apreciaciones del señor ministro porque conocemos personalmente a los hermanos sacerdotes inculpados y estamos en capacidad de garantizar por su integridad personal y por su trayectoria pastoral que son ajenos a este tipo de actividades delictivas. Enfatizamos una vez más nuestro rechazo a toda forma de violencia que azota actualmente el Magdalena Medio (Voz, 15 de septiembre de 1983, pp. 12 y 13).



**Figura 11.** Una madre con el rostro cubierto y su hijo de pocos meses son parte activa en la toma de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.

**Fuente:** fotografía de Alberto Acevedo. Tomada de Semanario *Voz*, 18 de agosto de 1983, Edición 1247, p. 24.

Durante los meses siguientes, fueron variadas las acciones de movilización por el desmonte del MAS y el cese de la violencia en el Magdalena Medio. En esas acciones confluían distintos sectores sociales de Barrancabermeja, y comúnmente estaban organizadas por la Coordinadora Popular. Las acciones de protesta se fueron extendiendo por todo el territorio nacional, pues como señalaba Vásquez del Real: “Condenar al terror en el Magdalena Medio, denunciar el genocidio de que es víctima su pueblo [...] es el deber ineludible de todo el movimiento democrático colombiano” (25 de agosto de 1983, p. 5). El compromiso de los dirigentes de la Coordinadora Popular generó la amenaza y persecución, no solo por parte del MAS, como había ocurrido con el sacerdote Eduardo Díaz, sino también del F2 de la Policía Nacional y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), tal como fueron asediados en el mes de agosto por estos organismos Leonardo Posada y César Martínez, dirigentes comunistas de la Coordinadora Popular (Voz, 1 de septiembre de 1983, p. 6).

Durante el mes de septiembre no cesaron las manifestaciones y las denuncias dirigidas al Gobierno nacional. El 24 de septiembre, el Alto Comisionado de la Presidencia de la República para el Magdalena Medio —cargo creado durante el gobierno de Belisario Betancur— se reunió con voceros del PCC, el FILA, el Nuevo Liberalismo, la Unidad Belisarista y de Unidad y Doctrina Conservadora —también de orientación belisarista—, quienes denunciaron una vez más los crímenes cometidos por el MAS y su vinculación con las Fuerza Militares (Voz, 29 de septiembre de 1983, p. 4). Seis días más tarde, las mismas organizaciones políticas, sumándose el Movimiento Independiente Regional y el Movimiento Liberal Popular, publicaron una declaración política que hacía un llamado al cese al fuego entre la insurgencia y las Fuerzas Militares, el desmonte del MAS, la búsqueda de la paz y la apertura democrática en la región y el país (Voz, 13 de octubre de 1983, p. 4).

La última acción de protesta en la ciudad informada por el Semanario *Voz* correspondió al ayuno convocado por la mayoría de las parroquias de la Diócesis de Barrancabermeja entre el 18 y 19 de noviembre. Cientos de personas se agruparon en las iglesias para conocer, comentar y denunciar la crítica situación que enfrentaba el Magdalena Medio. A las 4:30 p. m. del 19 de noviembre, se celebraron simultáneamente los actos litúrgicos por la paz y el cese de la violencia. Leonardo Posada concluiría lo siguiente de la jornada:

Los clérigos que propiciaron el ayuno consiguieron los tres objetivos propuestos: compartir el sufrimiento de los campesinos, entregar a los damnificados lo que se dejara de comer durante el ayuno y hacer una exigencia para el cese de la violencia (Posada, 20 de diciembre de 1983, p. 14).



**Figura 12.** Manifestación contra el MAS en el muelle de Barrancabermeja, 4 de septiembre de 1983.

**Fuente:** tomada de Semanario *Voz*, 22 de septiembre de 1983, Edición 1252, p. 17.



## Acumulados de luchas unitarias y violencia paraestatal

Las acciones de protesta social y los escenarios de unidad acontecidos en Barrancabermeja durante 1983 son el resultado del acumulado histórico de las luchas del movimiento social, político y sindical, que para finales de la década de los años 70 enfrentó uno de los períodos más críticos de represión y persecución estatal, antes, durante y después de la huelga petrolera y el paro cívico nacional de 1977. La necesidad de construir y fortalecer escenarios de convergencia ante las problemáticas sociales, económicas y laborales de la ciudad derivó en la creación de la Coordinadora de Solidaridad y Conflicto (1980) y la Coordinadora del Sector Nororiental (1981), antecedentes de lo que sería la Coordinadora Popular de Barrancabermeja (1983). Es un momento decisivo en la historia de las clases subalternas, pues la confluencia de las luchas sindicales, cívicas, políticas, agrarias y estudiantiles consolidaría un proceso unitario y combativo que durante varios años puso a temblar a las élites de la ciudad y la región del Magdalena Medio. Cada acción colectiva de protesta en Barrancabermeja representó, en palabras benjaminianas, una interrupción “en el cortejo triunfal de los dominadores” (Benjamin, 2008, p. 42).

El inicio de la década de los años 80 se caracterizó por el auge de las luchas populares que exigían mejoras en la calidad y cobertura de la prestación de servicios públicos, garantías para una vivienda digna, calidad de la atención en la prestación de los servicios de salud, adecuación de vías de transporte y protección de los bienes naturales. Los *paréntesis* en la extensión de estas luchas, como ocurrió con la continuidad del paro cívico por el derecho al agua potable, estuvieron relacionados con las nefastas consecuencias de la arremetida militar y paramilitar en la región del Magdalena Medio, a manos de la XIV Brigada del Ejército y los grupos paramilitares Muerte A Secuestradores (MAS), Los Tiznados y Los Grillos<sup>7</sup>. Pues ante los éxodos campesinos desde distintos municipios hacia Barrancabermeja, la Coordinadora Popular extendió sus brazos solidarios y desplegó acciones en defensa del campesinado y en denuncia de la criminalidad promovida por el Estado colombiano, en connivencia con gremios económicos de terratenientes y narcotraficantes. Es así como nace la Coordinadora Campesina del Magdalena Medio a inicios de la década de los años 80.

Es también un período de aproximaciones a la solución política y negociada al conflicto armado interno, impulsada desde el XIII Congreso Nacional del PCC en noviembre de 1980, que significó el inicio de diálogos entre las FARC-EP y el gobierno de Belisario Betancur, cuyos primeros acercamientos sucedieron en enero de 1983, y tendrían como resultados la firma en 1984 de los Acuerdos de Cese al Fuego, Paz y Tregua de La Uribe, Meta, y el nacimiento de la Unión Patriótica (UP) en 1985. Ante este acontecimiento, partidos políticos y movimientos sociales de Barrancabermeja y el Magdalena Medio aunaron esfuerzos para consolidar un nuevo escenario de participación política que permitiera desescalar el conflicto armado interno. En mayo de 1986, la UP obtendría un gran apoyo electoral en distintas regiones del país, entre esas el nordeste Antioqueño, el Magdalena Medio y el Bajo Cauca. Leonardo Posada, militante del PCC y dirigente de la Coordinadora Popular, sería elegido Representante a la Cámara por Santander y, pocos meses después, asesinado en Barrancabermeja (30 de agosto de 1986), momento en el que inicia el *Plan Baile Rojo*, orquestado por agentes de Estado, paramilitares y narcotraficantes, con el objetivo de asesinar a los militantes de la UP, especialmente aquellos elegidos en cargos de representación popular.

## Referencias bibliográficas

Antonio. (19 de mayo de 1983). La prédica patronal de “Caracol”, *Semanario Voz Proletaria*, Edición 1234, p. 3.

Acevedo, A. (6 de enero de 1983). Ferticol: No debe ser vendida a Indumil, *Semanario Voz Proletaria*, Edición 1215, p. 7.

<sup>7</sup> Las primeras organizaciones paramilitares del Magdalena Medio se identificaban como *Los Tiznados* y *Los Grillos* entre finales de los años 70 e inicios de los años 80. Posteriormente, irían usando indistintamente el nombre de MAS, o también conocidos como *Los Masetos*.

- Acevedo, A. (14 de abril de 1983). Barrancabermeja: 24 horas bajo el poder del pueblo, *Semanario Voz Proletaria*, Edición 1229, p. 5.
- Acevedo, A. (21 de abril de 1983). Barranca: en las calles el pueblo impuso el paro. Combativas acciones de masas, *Semanario Voz Proletaria*, Edición 1230, pp. 1 y 4).
- Acevedo, A. (28 de abril de 1983). Barrancabermeja: El agua, una lucha contra la muerte, *Semanario Voz Proletaria*, Edición 1231, p. 10.
- Acevedo, A. (5 de mayo de 1983). Emposan: Ni siquiera los salarios son decentes, *Semanario Voz Proletaria*, Edición 1232, p. 7.
- Acevedo, A. (12 de mayo de 1983). Barranca: Paro cívico otra vez, *Semanario Voz Proletaria*, Edición 1233, p. 1.
- Acevedo, A. (12 de mayo de 1983). Barranca en pie de lucha, *Semanario Voz Proletaria*, Edición 1233, p. 3.
- Acevedo, A. (12 de mayo de 1983). Ferticol: Desarrollo agrícola o militarismo, *Semanario Voz Proletaria*, Edición 1233, p. 7.
- Acevedo, A. (19 de mayo de 1983). Barrancabermeja: La dura lucha por el techo, *Semanario Voz Proletaria*, Edición 1234, p. 10.
- Archila Neira, M. (2000). Las luchas sociales del Post-Frente Nacional (1975-1990). *Revista Controversia*, 176, 12-37.
- Archila Neira, M. (2003). *Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia, 1958-1990*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH / Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP.
- Benjamin, W. (2008). *Tesis sobre la historia y otros fragmentos*. Editorial Itaca – Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
- Buenaventura, N. (28 de marzo de 1985). Alianza Obrero-Popular (2), *Semanario Voz*, Edición 1323, p. 16.
- Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos – CMCM. (1984). *Primer Congreso Nacional de Movimientos Cívicos. Octubre de 1983*. Fundación Foro Nacional por Colombia.
- Coordinadora Popular de Barrancabermeja. (1983). Resoluciones de la Asamblea General de la Coordinadora Popular, 2 de noviembre de 1983.
- Posada, L. (7 de abril de 1983). Barrancabermeja: Huelga en Ecopetrol y paro en la ciudad, *Semanario Voz Proletaria*, Edición 1228, pp. 1 y 5.
- Posada, L. (20 de diciembre de 1983). Magdalena Medio: ¿Ya pasó todo?, *Semanario Voz*, Edición 1265, p. 14.
- Rabelo, D. (11 de septiembre de 2016). Leonardo y Ricardo, *Agencia Prensa Rural*. Recuperado de <https://prensarural.org/spip/spip.php?article20140>
- USO. (5 de marzo de 1983). Comunicado público, Frente Obrero.

- Valero, E. (22 de septiembre de 1983). La tragedia del Magdalena Medio (I), *Semanario Voz*, Edición 1252, p. 14.
- Vásquez del Real, A. (25 de agosto de 1983). Qué significa el terror en el Magdalena Medio, *Semanario Voz*, Edición 1248, p. 5.
- Vieira White, G. (8 de septiembre de 1983). Debate en la Cámara sobre la violencia en el Magdalena Medio: “Arrebatrar las tierras campesinas y aplastar toda oposición”, *Semanario Voz*, Edición 1250, p. 3.
- Villarraga Sarmiento, A. (2015). *Los procesos de paz en Colombia, 1982-2014 (Documento Resumen)*. Fundación Cultura Democrática.
- Voz. (5 de enero de 1984). Un camino a la vista: Los paros cívicos, *Semanario Voz*, Edición 1266, p. 13.
- Voz. (27 de octubre de 1983). Barrancabermeja: Militarizada empresa Ferticol, *Semanario Voz*, Edición 1257, p. 8.
- Voz. (14 de julio de 1983). El misterio de Berrío, *Semanario Voz*, Edición 1242, p. 14.
- Voz. (28 de julio de 1983). Solidaridad con hospitales, *Semanario Voz*, Edición 1244, p. 9.
- Voz. (28 de julio de 1983). Nuevos crímenes: Detener y desintegrar el MAS, *Semanario Voz*, Edición 1244, p. 3.
- Voz. (11 de agosto de 1983). Carare-Opón: Amenazan a trabajadores, *Semanario Voz*, Edición 1246, p. 14.
- Voz. (11 de agosto de 1983). En el Magdalena Medio: Se agrava la violencia, *Semanario Voz*, Edición 1246, p. 6.
- Voz. (18 de agosto de 1983). ¡Detener a los asesinos del MAS!, *Semanario Voz*, Edición 1247, pp. 12 y 13.
- Voz. (25 de agosto de 1983). Violencia masiva en Santander, *Semanario Voz*, Edición 1248, pp. 12 y 13.
- Voz. (25 de agosto de 1983). El inquisidor de Barrancabermeja, *Semanario Voz*, Edición 1248, p. 5.
- Voz. (1 de septiembre de 1983). En Barranca: El F-2 asedia a comunistas, *Semanario Voz*, Edición 1249, p. 6.
- Voz. (8 de septiembre de 1983). Landazábal acusó al clero, *Semanario Voz*, Edición 1250, p. 3.
- Voz. (15 de septiembre de 1983). En el gobierno hay dos orientaciones distintas: La orientación que predomine en próximos días será decisiva para el desarrollo de toda situación política, *Semanario Voz*, Edición 1251, pp. 12 y 13.
- Voz. (22 de septiembre de 1983). Catorce MAS denunciados, *Semanario Voz*, Edición 1252, p. 17.
- Voz. (29 de septiembre de 1983). Identifican a nuevos miembros del MAS, *Semanario Voz*, Edición 1253, p. 4.
- Voz. (13 de octubre de 1983). En el Magdalena Medio: Fuerzas políticas exigen medidas para la paz definitiva, *Semanario Voz*, Edición 1255, p. 4.

- Voz Proletaria. (6 de enero de 1983). Magdalena Medio: Nombres propios del MAS, *Semanario Voz Proletaria*, Edición 1215, p. 1.
- Voz Proletaria. (13 de enero de 1983). El coronel Gil Bermúdez dirige MAS en Santander: Revelan integrantes de ese cuerpo criminal, *Semanario Voz Proletaria*, Edición 1216, p. 1.
- Voz Proletaria. (24 de marzo de 1983). Barrancabermeja: Preparan sexto paro por agua, *Semanario Voz Proletaria*, Edición 1226, p. 9.
- Voz Proletaria. (24 de marzo de 1983). ¡La USO iría a la huelga!, *Semanario Voz Proletaria*, Edición 1226, p. 4.
- Voz Proletaria. (31 de marzo de 1983). Ecopetrol torpedea acuerdo laboral, *Semanario Voz Proletaria*, Edición 1227, pp. 1 y 4.
- Voz Proletaria. (14 de abril de 1983). Ecopetrol. El acuerdo: un triunfo obrero-popular, *Semanario Voz Proletaria*, Edición 1229, p. 5.
- Voz Proletaria. (19 de mayo de 1983). El MAS y “los tiznados”: Continúan asesinando, *Semanario Voz Proletaria*, Edición 1234, pp. 1 y 4.
- Voz Proletaria. (19 de mayo de 1983). El 26 de mayo: Jornada nacional de Protesta, *Semanario Voz Proletaria*, Edición 1234, p. 3.
- Voz Proletaria. (2 de junio de 1983). Apenas se fue Belisario: El MAS sembró el terror en Cimitarra y Berrío, *Semanario Voz Proletaria*, Edición 1236, p. 5.
- Voz Proletaria. (9 de junio de 1983). ¿Ignora Betancur la historia de los concejales de Puerto Berrío?, *Semanario Voz Proletaria*, Edición 1237, p. 5.
- Voz Proletaria. (16 de junio de 1983). Nuevas víctimas busca el MAS: En el Magdalena Medio, *Semanario Voz Proletaria*, Edición 1238, p. 4.
- Voz Proletaria. (16 de junio de 1983). Se extiende la crisis hospitalaria, *Semanario Voz Proletaria*, Edición 1238, p. 5.
- Voz Proletaria. (23 de junio de 1983). Magdalena Medio: Amenazas a dirigentes sindicales, *Semanario Voz Proletaria*, Edición 1239, p. 7).